

La última oportunidad para las víctimas colombianas



**NORWEGIAN
REFUGEE COUNCIL**

Jacob Rothing y Richard Skretteberg

Aunque se espera que el número de desplazados internos en Colombia alcance niveles récord, las políticas de prevención no están dando resultado y se han bloqueado las iniciativas indemnizatorias.

Este desalentador panorama se vislumbra mientras los grupos paramilitares se reagrupan y perduran los conflictos entre el ELN¹ y las FARC², conflictos que conllevan agresiones repetidas a la población civil, violencia sexual y reclutamiento de menores. Los esfuerzos militares por controlar el territorio y erradicar las plantaciones de coca tan sólo han conseguido exacerbar una situación funesta y acuciar desplazamientos masivos. Aunque no hay mucho margen para el optimismo, ya que se infringe constantemente el derecho humanitario internacional, unas políticas preventivas estatales podrían reducir significativamente los riesgos que sufre la población civil.

Los nuevos desplazamientos constituyen el mejor indicador del impacto humano del conflicto en Colombia. El gobierno registró a 270.000 desplazados internos nuevos en 2007, mientras la ONG CODHES³ calculaba que habría que inscribir a otros tantos sólo en la primera mitad de 2008. Estas cifras elevadas han atraído la atención y han despertado la preocupación de John Holmes, Secretario General Adjunto de las Naciones Unidas para Asuntos Humanitarios y Coordinador de Ayuda de Emergencia, y de Walter Kälin, representante del Secretario General sobre los derechos humanos de los desplazados internos, quienes visitaron el país recientemente. Como declaró la Secretaria General del Consejo Noruego para los Refugiados, Elizabeth Rasmussen, que acudió hace poco a algunas de las regiones más azotadas de la costa pacífica, “los nuevos desplazamientos afectan a los grupos más vulnerables: las mujeres, los niños y las minorías étnicas. La sociedad civil y el gobierno deben

unirse para protegerles y garantizarles el acceso a la ayuda humanitaria”.

La actual estrategia del gobierno para proteger a los ciudadanos ha demostrado ser inadecuada y debe rediseñarse con urgencia. Pese a que ACNUR ha formulado algunas recomendaciones acertadas,⁴ el primer paso sería prestar mayor atención al Sistema de Alertas Tempranas de la Defensoría del Pueblo de Colombia que detecta situaciones de riesgo inmediato para la población civil y propone cómo pueden evitarse las agresiones y los abusos. El gobierno también debe encontrar la forma de evitar que se difumine la distinción entre civiles y combatientes y de mantener a los primeros alejados de las hostilidades.

Las soluciones duraderas al desplazamiento están directamente relacionadas con las leyes transicionales y las soluciones negociadas. La Ley de Justicia y Paz colombiana de 2005 facilitó la desmovilización de algunas tropas paramilitares y destacó la importancia de hacer frente a las necesidades de las víctimas. Además, intentó eliminar los incentivos para expropiar terrenos, hecho que alienta el conflicto.

En 2008 se lanzaron dos importantes iniciativas en favor de las víctimas. En primer lugar, el presidente promulgó un decreto que ofrecía indemnizaciones a determinadas víctimas de los ataques de las guerrillas y los paramilitares.⁵ En segundo lugar, una vez consultadas ampliamente las víctimas de la guerrilla y de los abusos perpetrados por el Estado y los paramilitares, y tras un diálogo entre las organizaciones de la sociedad civil y el Congreso, se introdujo una Ley de Víctimas sin precedentes que prometía conceder indemnizaciones,

pero el decreto presidencial, que excluye los delitos ordenados por el Estado y los relacionados con la propiedad, todavía está pendiente de aplicación. A su vez, la Ley de Víctimas quedó seriamente debilitada por una alianza en el gobierno que defendía recortes presupuestarios, para ser bloqueada posteriormente por una oposición desilusionada.

A pesar de estos fracasos en 2009 se ha presentado otra oportunidad para paliar las consecuencias de la violencia. El Programa Nacional de Restitución de Bienes, que afronta la devolución de los bienes robados y pretende facilitar los retornos a gran escala, será sometido a la votación de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación a mediados de 2009. Desarrollado gracias al diálogo entre las organizaciones de la sociedad civil y las instituciones estatales con el apoyo de ACNUR y el Consejo Noruego para los Refugiados, el Plan ofrece soluciones duraderas en la línea del espíritu de las negociaciones con los paramilitares que llevó a cabo el gobierno de Uribe. A menos que la Comisión vote a favor de la versión actual, que incluye muchas de las características esenciales de la Ley de Víctimas, el compromiso del gobierno con las políticas indemnizatorias quedará hueco y la noción de justicia transicional se derrumbará en medio de la guerra.

Jacob Rothing (jacob.rothing@nrc.org.co) es consultor del Consejo Noruego para los Refugiados en Colombia y Richard Skretteberg (richard.skretteberg@nrc.no) es consejero superior del Departamento de Información y Apoyo del Consejo en Noruega (http://www.nrc.no).

1. Ejército de Liberación Nacional.

2. Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia.

3. www.codhes.org

4. Introducción y conclusiones. Balance de la política pública de atención integral a la población desplazada por la violencia, 2004-2006. Disponible en castellano en: <http://www.acnur.org/biblioteca/pdf/4901.pdf>

5. Decreto presidencial 1290/2008.